

Esa misma noche del domingo el Presidente de Ecuador declaró la zona de emergencia en las tres provincias más afectadas, Pichincha, Napo y Sucumbios. Se suspendieron las clases en los colegios durante varios días, se cerró el aeropuerto de Quito y el lunes se paralizó toda la actividad pública y privada, debido al elevado grado de contaminación ambiental. La cantidad de ceniza suspendida en el aire llegó a niveles de riesgo para la salud (10,000 partículas por cm³, cuando lo aceptable es 400). Según datos del Instituto Geofísico cayeron un millón de toneladas de ceniza, una cantidad tres veces superior a la que expulsó el volcán Pichincha en la erupción de 1999, la última más importante que afectó al país.

Por fortuna a partir del martes día 5 la lluvia contribuyó a limpiar el ambiente y reducir los riesgos de afecciones respiratorias, dermatológicas u oculares. Las autoridades públicas municipales, provinciales y nacionales se movilizaron con rapidez para evaluar la situación de las comunidades más afectadas e iniciar las medidas de asistencia. El Sistema de

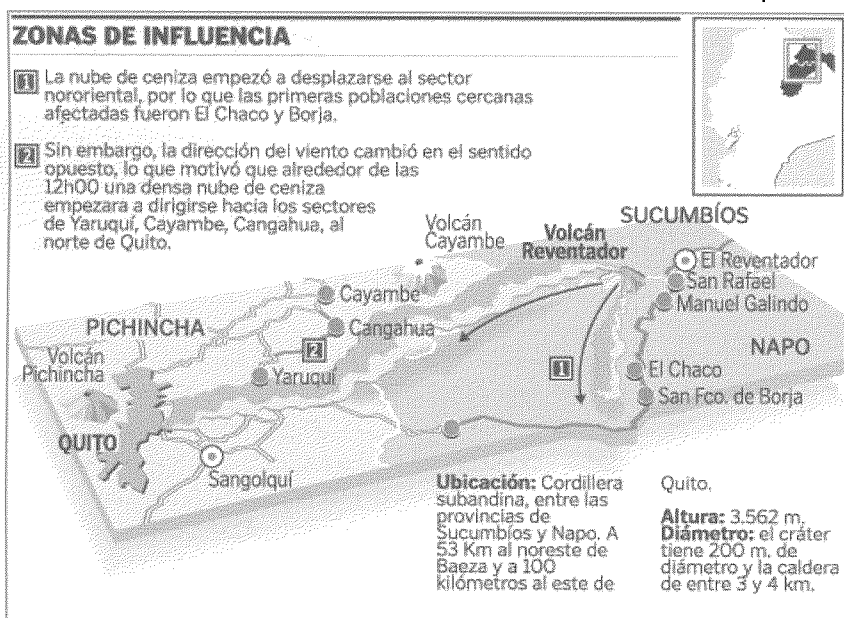
productivo (agricultura y ganadería) y en los sistemas de agua potable, especialmente en las comunidades rurales, que obtienen el agua de instalaciones muy básicas y desprotegidas. En general las viviendas y la infraestructura pública sufrieron efectos muy leves. La energía eléctrica faltó durante varios días en un gran número de pueblos y comunidades.

Salud y agua potable, prioridades básicas

No se registraron heridos ni muertos por causas directas del volcán. Se crearon algunos albergues, con muy pocos ocupantes (menos de 100 en total), porque casi todos los pobladores de las zonas afectadas se negaban a abandonar sus casas y su ganado. Otros se ubicaron en casas de familiares y amigos.

La infraestructura de salud no dejó de funcionar, aunque en muchos casos sin disponer de electricidad ni agua potable por varios días. La lluvia en los primeros días contribuyó a contener la morbilidad de enfermedades respiratorias, pero el riesgo estaba a latente cuando el ambiente se vuelve más seco. En general se detectó la necesidad de contar con un sistema de monitoreo para la vigilancia epidemiológica. El Consejo Provincial de Pichincha envió once unidades móviles de salud para atender los posibles afectados en las zonas rurales.

La caída de ceniza afectó intensamente a gran parte de los sistemas de provisión de agua, sobre todo en las zonas rurales donde la captación es abierta. En las primeras horas, muchas comunidades estuvieron consumiendo agua de vertientes naturales sin ningún tipo de tratamiento. En los días siguientes camiones cisterna les proveyeron de agua potable. Sin embargo, esta erupción ha puesto de manifiesto una vez más la extrema vulnerabilidad existente en este tema y es necesario llevar a cabo obras importantes para proteger las fuentes de captación, reserva y distribución. Igualmente, se debe mejorar la formación comunitaria para el tratamiento (con cloro) del agua. Sólo en los centros urbanos de mayor tamaño (Quito, Cayambe, Pedro Moncayo, El Quiche y otros) los problemas fueron mínimos, debido en gran parte a las medidas preventivas puestas en práctica después de otras erupciones recientes. Muy significativo es el esfuerzo que realizó la compañía de agua potable del Distrito Metropolitano de Quito, que después de la erupción del volcán Pichincha en 1999 realizó una gran inversión para cubrir y proteger el sistema, evitando que casi 2 millones de personas sufrieran ahora la contaminación del agua.



Diario El Comercio, 4 de noviembre 2002
(www.elcomercio.com)

Naciones Unidas activó su grupo de emergencia, denominado UNETE, y se organizó una misión de evaluación en colaboración con las autoridades nacionales, que recorrió las principales zonas afectadas el día 6 de noviembre.

En las primeras horas lo urgente era proveer mascarillas de protección, agua potable y medicamentos esenciales. Aunque la ceniza, y posteriormente el azufre provocaron alarma social, los daños más importantes se produjeron en el sistema

